

Voz indígena del pueblo wayúu que significa **NUUESTRA TIERRA**

woumain

Revista del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias "Luciano Romero Molina"

Nº 26. Julio 2026



Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia

Tully
Julio 2026

woumain

Voz indígena del pueblo wayúu
que significa NUESTRA TIERRA

Boletín del Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias
"Luciano Romero Molina"
Nº 26. Julio del 2026

**Programa Asturiano de Atención
a Víctimas de la Violencia en
Colombia, un cuarto de siglo
defendiendo la vida**

AGRADECIMIENTOS:

A las gentes y al gobierno de Asturias, a la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, a los ayuntamientos de Gijón, Langreo, a Project Defenders, a las organizaciones sociales asturianas que apoyan al Programa de Derechos Humanos y acompañan a las personas acogidas: Amnistía Internacional Unidad Territorial de Asturias; Asamblea Moza d'Asturies, AMA; Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR; Comisiones Obreras de Asturias, CCOO; Comité de Solidaridad con América Latina, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, CSCA; Consejo de la Juventud de Asturias. CMPA; Coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, CODOPA; Corriente Sindical de Izquierda, CSI; Ecologistas en Acción de Asturias; Ingeniería Sin Fronteras, Asturias, ISFA; Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ; Asociación Paz y Solidaridad; Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias SUA-TEA; Confederación Intersindical; Unión General de Trabajadores de Asturias, UGT y de manera especial a SOLDEPAZ PACHAKUTI por gestionar el PAV y por su compromiso internacionalista.

A las organizaciones colombianas que integran el Comité de Selección de casos del PAV: CUT, CPDH, MOVICE, ANDAS, CSPP, ONIC, CAJAR, FENSUAGRO, CNA.

**COLECTIVO DE
COLOMBIANOS/AS
REFUGIADOS EN ASTURIAS
"LUCIANO ROMERO MOLINA"**

Correo: programasturias@gmail.com
Teléfono 687 003 737

Calle Manuel Llanceza 42 bajo
C.P. 33208. Xixón-Asturies

Editoria: Un país roto que se levantará	3
Ausencias que pesan	5
Bogotá en resistencia sembrando vida y dignidad por el derecho a la ciudad	8
Contradicciones populares en el departamento del Cauca	13
Guerra con rostro infantil	16
La serranía de San Lucas en peligro	18
Salud precaria en el centro del Valle del Cauca	21
Entrevista: Unai Aranzadi	24
Un racismo normalizado	26
Un muñeco de utilería recolonica a América Latina	28
Letras por la vida	30

Edita: Colectivo de Colombianos/as Refugiado/as en Asturias "Luciano Romero Molina"

Imprime: Paper&Color



Editorial:

Un país roto que se levantará

Colombia sale rota del proceso que eligió presidente de la república a ABELARDO DE LA ESPRIELLA con una diferencia inferior al 1% de los votos. El resultado no hace justicia a los pasos ejemplares de UNIDAD política de la izquierda ante el avance neo fascista con la creación del Pacto Histórico. No bastó la buena gestión de la economía por parte del progresismo, ni los avances en la construcción del Estado Social de Derecho en beneficio de la población más vulnerable.

Preocupa la polarización y los anuncios de Abelardo de La Espriella de “destripar a la izquierda”, autorizar la minería y la fractura hidráulica en zonas de alta montaña y de alta biodiversidad, páramos y selvas. También es un peligro el uso de nuestro país para

las acciones violentas de EUA y de Israel.

El servilismo a Trump del candidato ganador que tiene nacionalidad de USA, pone a Colombia en la internacional fascista, para alegría de Milei, Bukele, Bolsonaro, Fujimori, Noboa, Netanyahu...

Se votó contra los intereses de los más



pobres buscando seguridad, movidos por el odio al petrismo y a la izquierda, con homofobia, racismo contra los pueblos indígenas y negros, con xenofobia a los venezolanos. Con anuncios de aplicar más violencia armada.

Los resultados imponen el camino más difícil pero ya conocido por el país de las resistencias. Seguir luchando. Defender los avances del campo popular.

Mantener alta la bandera de la paz para Colombia y para los países de Nuestra América, recabar en la solidaridad inter-

nacional para que el valiente movimiento social colombiano resista los anuncios y planes del nuevo exterminio.

La agenda del odio campea. Las élites se frotan las manos.

Nosotras seguiremos haciendo diplomacia ciudadana por la paz y buscando acuerdos humanitarios en las regiones y un acuerdo nacional para proteger con la movilización los avances en la construcción del Estado Social y de Derecho y para detener el conflicto armado interno.

Unidas superaremos el golpe.





Ausencias que pesan

En las montañas y los valles del norte del Cauca existen hogares donde la mesa continúa servida para quien nunca regresó. Habitaciones intactas, fotografías que no se mueven de las paredes y una espera suspendida en el tiempo. Allí, más que la presencia, habita la ausencia.

Es la realidad de la desaparición forzada en Colombia.

Aunque pueda parecer una tragedia lejana, en Colombia es una realidad vigente. La Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD) tiene registradas 132.877 personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado.

Detrás de esa cifra hay familias enteras y más de 43.800 personas que han convertido la búsqueda en una causa de vida. Continúan exigiendo respuestas, buscando en archivos, cementerios, montañas y ríos. A pesar del paso del tiempo siguen con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

En municipios como Corinto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Miranda y Toribío, la desaparición forzada está en la

memoria reciente. Quien recorre esos territorios comprende que es una herida colectiva y abierta, que atraviesa generaciones en el Norte del Cauca.

La historia de búsqueda de Claudia Vanessa refleja la realidad de miles de víctimas del conflicto armado. Tenía 14 años cuando se la llevaron. Había pasado por el asesinato de sus padres, Ricardo Chuvila Corrales y Claudia Patricia Casas Molina, ocurrido el 27 de abril de 2003 en la vereda La Espriella, Tumaco. Claudia Vanessa y su hermano Daniel Ricardo quedaron huérfanos siendo muy pequeños. Daniel se quedó con nuestros padres. Claudia vivió primero con su abuela materna y luego fue enviada con su abuelo a la vereda Tallambí, en Cumbal, con la esperanza de que creciera en un lugar más tranquilo, lejos de la violencia. Pero la guerra también la alcanzó allí.

En el 2008 fue reclutada de manera forzada por la columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC-EP. Desde ese momento perdimos todo contacto con ella. Pasaron seis años sin noticias. En 2014 algunas personas

nos contaron que un comandante del grupo armado había dicho que la niña intentó escapar dos veces. Según esa versión, después del segundo intento fue llevada a un consejo de guerra y asesinada junto a otra joven. Sin embargo, nunca entregaron su cuerpo ni hubo una confirmación oficial.

Por eso seguimos buscándola. Nuestra familia vive con la incertidumbre de no saber qué pasó realmente. Si Claudia Vanessa murió, queremos saber dónde está. Si alguien conoce algo, necesitamos una pista que nos ayude a encontrarla. La Unidad de Búsqueda mantiene el caso abierto, pero hasta hoy no hemos recibido respuestas. Han pasado muchos años de búsqueda, de espera y de esperanza.

Su ausencia sigue dejando un vacío inmenso en nuestra familia y una pregunta: ¿qué pasó con Claudia Vanessa?

Su vida es testimonio de lo que significa habitar un país de inmensa riqueza natural y cultural, pero marcado por décadas de violencia, despojo e injusticia. En Colombia, para muchas personas, vivir ha sido una lucha constante por permanecer en la tierra que aman y defender la vida frente a intereses que, con demasiada frecuencia, han puesto la riqueza por encima de la dignidad humana.

La desaparición forzada produce una for-

ma de dolor particularmente cruel. No hay cuerpo que despedir, no hay funeral que cierre el ciclo, no existe una certeza que permita iniciar el duelo. La incertidumbre se convierte en una presencia permanente. Madres, padres, hermanas y hermanos viven entre la esperanza y el temor. La búsqueda ocupa los días, reorganiza la vida cotidiana y transforma el tiempo en una sucesión interminable de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, los niños crecen preguntando por quienes faltan y aprenden demasiado pronto el significado de la ausencia.

A diferencia de otras violencias, la desaparición no termina cuando la víctima es arrebatada. Su impacto se prolonga durante años e incluso décadas, afectando la salud emocional, las relaciones familiares y los proyectos de vida de quienes permanecen esperando.

Las consecuencias trascienden el ámbito familiar. Cuando desaparecen docentes, líderes comunitarios, autoridades indígenas, jóvenes lideresas o defensores de derechos humanos, el impacto alcanza a toda la comunidad.

Cada desaparición envía un mensaje de intimidación. Los procesos organizativos se debilitan, las iniciativas colectivas se ralentizan y la participación social se reduce. Poco a poco, el miedo se instala como una forma de control. Hablar puede resultar peligroso; denunciar, aún más. La persistencia del fenómeno demuestra que no pertenece únicamente al pasado.

La propia UBPD ha documentado miles de nuevos registros de desaparición en los últimos años, evidenciando que la búsqueda continúa siendo una tarea urgente para el Estado y para la sociedad colombiana. Por ello, muchos casos nunca llegan a registrarse formalmente y las cifras oficiales apenas reflejan una parte de la realidad. Detrás de cada número existe una historia interrumpida y una comunidad que aprende a convivir con el silencio.

La desaparición también deja profundas consecuencias económicas. Cuando quien sostenía el hogar desaparece, las familias no solo pierden ingresos: también deben





invertir recursos, tiempo y esfuerzos en una búsqueda que puede prolongarse durante años. En las zonas rurales del norte del Cauca esta situación suele provocar el abandono de parcelas, la suspensión de proyectos productivos y, en muchos casos, el desplazamiento de familias enteras hacia otros territorios. La desaparición no solo arrebatara seres queridos; también debilita la estabilidad económica, social y emocional de quienes permanecen, obligándolos a reconstruir sus vidas en medio de la incertidumbre.

Ni la incertidumbre ni la carga económica aparecen en las estadísticas oficiales, pero que transforma profundamente la realidad de cientos de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Buscar es resistir

Las fotografías exhibidas en las casas, los murales pintados en los pueblos, las marchas, los plantones y los colectivos de familiares constituyen formas de resistencia frente a la impunidad y al olvido. Cada acción reafirma una convicción sencilla y poderosa: quien desaparece no puede ser borrado de la memoria colectiva.

Desde su creación en 2018, la UBPD ha logrado recuperar miles de cuerpos, realizar cientos de entregas dignas a las familias y encontrar con vida a 242 personas reportadas como desaparecidas. Sin embargo, la magnitud del universo de búsqueda demuestra que el desafío humanitario sigue siendo inmenso.

Preguntar ¿dónde está? y gritar “¡aquí la seguimos buscando!”, “¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, son maneras de defender la verdad frente al silencio y la dignidad frente al miedo.

No es posible reflexionar sobre el territorio sin reconocer el vacío que dejan quienes aún no han sido encontrados. La desaparición forzada no afecta únicamente a las víctimas directas. Modifica las dinámicas familiares, debilita el tejido social, limita la participación comunitaria y profundiza las desigualdades territoriales.

Es una violencia que permanece viva mientras no exista una respuesta, mientras haya una persona desaparecida una familia seguirá esperando. Mientras una madre continúe buscando a su hijo, una comunidad conservará una herida abierta. Y mientras existan miles de nombres pendientes de encontrar, Colombia seguirá teniendo una deuda con la verdad y con la memoria.

Es un tema que duele. Duele nombrarlo y duele escribir sobre él. Pero es necesario seguir contándolo porque el silencio nunca ha sido una forma de justicia y porque recordar es también una manera de buscar y de resistir a la impunidad.



Bogotá en resistencia: sembrando vida y dignidad por el derecho a la ciudad

*Por: Menlly Angelito Aldana Primiciero
Lideresa Social y Defensora de Derechos Humanos (Fundación Manoyano)*

La violencia en Bogotá no es aleatoria, tiene una geografía precisa e intencional. La desigualdad multidimensional que desgarró a esta capital no es producto del azar o de la escasez de recursos, sino de una decisión política e institucional de segregar el espacio. Quienes han gobernado la ciudad históricamente han diseñado un modelo metropolitano de exclusión que nos niega como sujetos de derechos, transformando el mapa de Bogotá en una cartografía del despojo y el miedo que castiga con saña clasista y patriarcal a las mayorías.

Para entender la situación estructural de Bogotá, es necesario evidenciar cómo las violencias y las asimetrías sociales se manifiestan con crudeza a lo largo y ancho de sus veinte localidades, trazando un mapa implacable de la desigualdad donde el co-

lapso no es fragmentado; es toda la ciudad y la sociedad comunitaria y popular en su conjunto la que la está pasando mal, unida en una misma geografía del dolor donde la inoperancia institucional y la ceguera tecnocrática de los asesores públicos han entregado el territorio de Bogotá a la crisis.

La realidad actual de la ciudad nos muestra que la crisis humanitaria y de seguridad se ha salido por completo de las manos de la administración de turno. Históricamente, la capital ha sido el principal refugio de miles de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado de las regiones; a este dolor histórico se suma hoy el drama contemporáneo de la migración de miles de hermanos venezolanos y personas de otros países en situación de guerra y desa-

rraigo absoluto.

El asfalto capitalino recibe este éxodo con el frío de la xenofobia, la indiferencia y un clasismo que empuja a los recién llegados y a los desterrados locales a los márgenes de la supervivencia. Lejos de encontrar una garantía de vida, las poblaciones llegan a integrarse a los barrios populares donde las economías ilícitas mutan, se reorganizan y gobiernan de facto ante la mirada indolente de la administración de turno. En las periferias asfixiadas al sur de la ciudad, las comunidades sobreviven bajo el terror de problemáticas estructurales sumadas a grupos al margen de la ley que se disputan el control territorial. El sicariato y el robo violento con armas se convirtieron en paisaje, mientras sufrimos un perverso desplazamiento intraurbano por ubicación geográfica.

Como mujer popular que ha sufrido en carne propia los dolores de este territorio, y desde mi labor como defensora de derechos humanos, levanto mi voz para denunciar una de las bajas más crueles de esta guerra urbana: la instrumentalización sistemática de los habitantes de calle, convertidos en escudos humanos, informantes forzados o carne de cañón por parte de las mafias locales ante la absoluta indolencia



de una alcaldía que los trata como basura social. Mi mirada de defensora y de mujer que ha caminado el miedo junto a otras mujeres no se calla ante el hecho de que en Bogotá nuestros cuerpos, los de las infancias, los jóvenes y las identidades diversas siguen siendo utilizados como el primer territorio de conquista; somos violentadas, acosadas y mercantilizadas, transformados en botín de control territorial para imponer las fronteras invisibles del miedo.

Mientras la alcaldía intenta maquillar el colapso con estadísticas de escritorio, la delincuencia se ensaña con las infancias mediante el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes altamente vulnerables. Es la complicidad y la ceguera de los asesores de gobierno lo que profundiza la herida social, diseñando políticas fallidas de espalda al pueblo, militarizando de forma inútil la vida civil mediante estrategias cosméticas y permitiendo que la minería ilegal y el extractivismo de canteras clandestinas devoren los cerros del sur y destruyan las fuentes hídricas, mientras el Relleno Sanitario Doña Juana en Mochuelo sigue destilando una muerte lenta sobre las familias populares.

En esta Bogotá caótica, la movilidad se transformó en un mecanismo de tortura y exclusión que nos roba horas de vida en trayectos ineficientes, profundizando barreras estructurales infranqueables para las mayorías populares. El transporte público deficiente, costoso e inseguro es un muro que impide acceder a los lugares de trabajo, al estudio o al disfrute pleno de la ciudad.

Esta fractura social se profundiza al mirar el derecho a la educación, donde el acceso desde la primera infancia hasta el nivel universitario está condicionado por una segregación geográfica. En los sectores vulnerables, los centros educativos y las universidades estatales simplemente no están cerca de los barrios, lo que obliga a los estudiantes y a sus familias a padecer trayectos extenuantes que devoran su presupuesto diario. A este aislamiento físico se suma



la desconexión digital, en nuestras localidades populares no hay acceso a internet gratuito, levantando un muro tecnológico que sabotea el aprendizaje y profundiza la exclusión. Este obstáculo territorial, digital y económico, sumado al desempleo en los hogares, dispara la deserción escolar y universitaria, empujando a las juventudes y a las infancias hacia la informalidad laboral o el reclutamiento forzoso. Sin cupos suficientes, sin conectividad y con los jardines infantiles de la periferia desmantelados, el derecho a estudiar en la ciudad se convierte en un privilegio de clase.

La economía informal no es una opción de progreso, es un rebusque desesperado frente al desempleo donde la Administración Distrital persigue a los vendedores ambulantes porque hay que defender el espacio público y privatizarlo sin darle garantías a las actividades alternativas de las bases de las economías populares llevar el pan a su mesa.

Las ollas urbanas y las huertas comunitarias son resistencia.

Las ollas comunitarias y la agricultura urbana no son actos de caridad; son decisiones políticas de resistencia, autogobierno y control territorial frente al abandono de las instituciones. Sostener una olla popular en los barrios populares es un ejercicio humanitario que arrebató el hambre, mientras que sembrar la tierra en medio del asfalto constituye un acto de desobediencia civil que defiende el suelo contra la voracidad del capital inmobiliario y la privatización del espacio público.

Esta defensa de los bienes comunes ha sido perseguida con violencia para dismantlar los procesos de base; una persecución que segó la vida de Camila y Camilo, compañeros huerteros del proceso comunitario El Bicho en la Localidad de Bosa. Por impulsar la agricultura urbana, el cuidado del medio ambiente, la cultura y la educación popular he recibido amenazas y hostigamientos.

Defender el territorio y la siembra comunitaria en Bogotá es disputarles el poder a las economías de la muerte, levantando las huertas populares como trincheras de vida frente al abuso policial y al pánico machista y a un miedo homicida patriarcal porque estas labores son de nosotras y de las jóvenes.

La crisis habitacional en Bogotá se ensaña con los sectores vulnerables a través de los inquilinatos de miseria o “pagadarios”, un flagelo de hacinamiento por noches sin contratos ni estabilidad que opera en varias localidades ubicadas en sitios estratégicos. Este despojo inmobiliario, impulsado por la gentrificación corporativa, la delincuencia organizada y el apoyo de los gobiernos de turno, fractura el tejido social y se ha expandido silenciosamente por el centro y el interior de la urbe, instrumentalizando la necesidad de las familias desplazadas, migrantes y habitantes de calle frente a esta exclusión del derecho a la vivienda digna.

El tejido comunitario es fracturado por redes de delincuencia y prácticas de “limpieza social”, mientras las familias enfrentan la impunidad ante delitos graves como

la desaparición forzada en contextos urbanos.

Se camina también en el desamparo donde se condenan al peligro constante a mujeres y jóvenes, y donde el poder persigue a las lideresas que denuncian el loteo ilegal ejecutado por mafias de tierreros. La humillación adquiere formas aún más perversas en sectores residenciales e industriales como Fontibón, Engativá, Puente Aranda y Antonio Nariño, donde el desempleo quiebra los hogares en cordones invisibles de miseria dentro de un entorno gris donde se niega el derecho al verde. Un verde que sí acaparan las localidades ricas del norte, desnudando la cara más vergonzosa de la pobreza oculta en Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Usaquén.

Tras fachadas estables que aparentan comodidad, miles de familias, personas mayores sin jubilación y hogares diversos padecen un hambre silenciosa; el mercado las expulsa con el encarecimiento del suelo, mientras las instituciones les cierran la puerta argumentando que habitan en zonas privilegiadas.

Las políticas neoliberales de las Administraciones Distrital y locales le dan la espalda al territorio: el 75% de Bogotá es campo, ríos y ecosistemas de páramo. Las instituciones y el capital privado ignoran que las extensiones rurales de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, San

Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén tienen la capacidad de abastecer con alimentos limpios, de calidad y a precios justos a toda la capital, convirtiéndose en el motor clave para erradicar el hambre que asfixia a las localidades urbanas. Al carecer de voluntad política para blindar el agua y la biodiversidad andina frente a la expansión descontrolada del cemento, la minería ilegal y la venta fraudulenta de lotes, las economías ilícitas y el control territorial que despojan a las comunidades al desplazamiento forzado intraurbano y el asesinato sistemático de los liderazgos sociales que defienden la ciudad.

En respuesta a este desprecio clasista, los territorios han blindado sus propios espacios de participación comunitaria, tejiendo desde la base una resistencia que exige integrar lo rural con lo urbano para disputar el control de la planeación y transformarlo en un autogobierno colectivo. Es en este reclamo radical por el derecho a la ciudad donde exigimos la participación ciudadana para emerger formas de gobernanza más colectivas.

En Bogotá los Presupuestos Participativos son un mecanismo legal donde las veinte alcaldías locales destinan recursos públicos de los Fondos de Desarrollo Local para que las comunidades propongan y voten de qué manera invertir el dinero en sus propios barrios. La trampa de este modelo radica en que la administración utiliza



la necesidad de la base social, haciéndole creer que sus ideas y proyectos vecinales definirán el rumbo del territorio. Sin embargo, la ejecución de lo votado es perversa: las organizaciones de base no tienen la potestad de administrar los recursos; en su lugar, el gobierno local contrata a consorcios privados, empresas tercerizadas y fundaciones de fachada aliadas con los clanes políticos de turno. El resultado es un saqueo corporativo donde los operadores particulares inflan los costos, precarizan las obras y se quedan con el dinero público. Mientras las comunidades ponen el cuerpo y la esperanza en las calles, este sistema opera en realidad como un mecanismo que privatiza la inversión, desmantela la autonomía popular e impone trabas institucionales que nos impiden trabajar de forma colectiva como pares que sufrimos junto a las poblaciones más vulnerables.

La superación del caos estructural en Bogotá no depende de soluciones aisladas, sino de reconocer e incluir a todas las fuerzas que configuran su complejo mapa territorial. El derecho a la ciudad exige un diálogo corresponsable donde el Estado, las Administraciones Distrital y locales y la fuerza pública dejen atrás la represión para garantizar políticas públicas de inclusión real. Esta reconstrucción es indisoluble de las demandas de las Juntas de Acción Co-

munal, las lideresas de las ollas populares, el campesinado y los cabildos indígenas ancestrales. La urbe debe abrazar la potencia transformadora de sus juventudes: artistas, muralistas y agrupaciones de rap que frenan el reclutamiento con arte, junto al tejido vivo de ambientalistas, animalistas, madres comunitarias, habitantes de calle, trabajadores informales y comunidades migrantes en situación de desarraigo.

Al mismo tiempo, la realidad de la seguridad obliga a reconocer la presencia periférica de bandas organizadas y reductos paramilitares cuyas economías de muerte, cómo el tráfico, la trata de personas y el sicariato deben ser enfrentadas desde la raíz social. La paz y la planificación de Bacatá solo serán posibles cuando todos los sectores políticos, gubernamentales y comunitarios, e incluso las crudas realidades del conflicto, se sienten a concertar un ordenamiento alternativo. El mensaje final es contundente: el rumbo de la capital no puede seguir definiéndose a espaldas de sus habitantes; un hábitat justo y sustentable exige que ningún actor sea excluido, porque ninguna decisión sobre el territorio puede tomarse sin la participación de quienes damos la vida.





Contradicciones populares en el departamento del Cauca

*“La palabra sin la acción es vacía...
y la palabra tiene que caminar...
Marchemos unidos”*

Padre Álvaro Ulcué Chocué

Las diferencias entre algunas comunidades del Cauca giran en torno al choque de jurisdicciones ancestrales y a la tenencia de la tierra en predios que se disputan los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afro descendientes, agravadas por la injerencia y el control social de grupos armados ilegales que se expandieron después de la traición al Tratado de Paz suscrito por el Estado de Colombia con las FARC en los gobiernos de Santos y Duque.

Históricamente los pueblos indígenas, las comunidades negras y el campesinado del Cauca han vivido procesos violentos de despojo y discriminación por terratenientes y agroindustriales con la complicidad del Estado colombiano. A esto se suman las tensiones por el control territorial entre pueblos ancestrales, afro descendientes y campesinos.

Se han presentado choques territoriales

graves, como los enfrentamientos inéditos entre los pueblos nasa y misak (guambianos) por tierras en el municipio de Silvia. A dicha situación han contribuido decisiones ambiguas de instituciones del Estado.

Recientemente los ánimos se han caldeado por la disputa de un terreno de 800 hectáreas ubicado en el sector de La Ensellada, zona de alta montaña en el municipio de Silvia. Este predio es reclamado, a la vez, por el resguardo Guambía del pueblo misak y el resguardo Pitayó, del pueblo nasa. Aunque la tensión es histórica (algunos conflictos llevan tres siglos), las confrontaciones se agudizaron desde el 21 de mayo de 2026 cuando miembros de ambas comunidades se enfrentaron, algunos portando armas.

El conflicto se desata con una resolución expedida por la ANT (Agencia Nacional de Tierras) que reconoció la vigencia de un título



colonial de la comunidad nasa del resguardo de Pitayó que confirmaría su propiedad sobre un predio también pretendido por el pueblo misak, que alega que solo se ha declarado la existencia de un título histórico.

La contradicción radica en falta de tierras para la economía campesina y de territorio para los indígenas y las comunidades negras, debido al acaparamiento por las élites locales de los mejores suelos usados para ganadería extensiva y agroindustria.

También incide en el conflicto inter étnico la disputa por la gobernanza de los territorios colectivos y las diferentes visiones sobre el desarrollo y el uso del suelo que tienen los indígenas, el campesinado y las comunidades negras que sustentan sus derechos de propiedad en títulos ancestrales, en posesiones tras la abolición de la esclavitud y en el reconocimiento de la propiedad colectiva para las negritudes en la Constitución de 1991.

Los pueblos indígenas -como el nasa- fundamentan su reclamo en la existencia

de derechos territoriales originarios y sus ocupaciones pretenden la “liberación de la madre tierra”, guiadas por los principios del Derecho Propio o Ley de Origen que promovía el taita-autoridad- Manuel Quintín Lame.

En los últimos años los pueblos indígenas han ocupado fincas dedicadas a la agroindustria.

Es el caso de la recuperación de la finca El Nilo donde hubo una masacre de indígenas en 1991, compensada por el gobierno con la promesa de entregarles 15.663 hectáreas de tierra. También fue ocupada la hacienda de

López Adentro, mitigándose la escasez de tierras ante el crecimiento de la población indígena. Esta lucha por la recuperación del territorio costó la vida -entre otros- al profesor y abogado Óscar López.

Otra hacienda que está en el proceso de liberación por el pueblo nasa es La Emperatriz, en disputa con la población afro de la zona en medio de operativos de la policía anti disturbios denunciada por ataques y maltrato a los indígenas.

Mientras los indígenas bus-





can frenar el monocultivo de la caña de azúcar para restaurar el equilibrio medioambiental y el uso tradicional, algunas comunidades afro se oponen a estas ocupaciones porque tienen visiones diferentes del uso del suelo y los ingenios azucareros representan una fuente vital de empleo para su población.

Las disputas territoriales derivan en enfrentamientos directos que dejan personas heridas, daños a bienes y quema de cultivos. La vulnerabilidad de la zona, marcada por el narcotráfico y la minería ilegal, es aprovechada por grupos armados disidentes para avivar el conflicto y usurpar tierras.

Diálogo entre comunidades diversas

Las contradicciones por tierras entre los indígenas y el campesinado se han resuelto de manera menos traumática a partir de la consigna compartida de recuperar las tierras desde la creación en 1967 de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC.

El campesinado y los indígenas desalabaron fincas exigiendo reforma agraria. Los pueblos indígenas retomaron su proceso autónomo de lucha con la creación en 1971 del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y de la Guardia Indígena en el 2000, para proteger el territorio y la movilización social y para acciones humanitarias coordinadas con la Cruz Roja Internacional y la ONU.

Ante la problemática de guerra y la conveniencia de resolver los conflictos interétnicos en el norte del Cauca se conformó en el 2013 la mesa interétnica de diálogo en Villa Rica y Guachené, integrada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del

Cauca (ACONC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO-CUT).

Esta mesa emitió en el 2016 la primera resolución conjunta del proceso de unidad interétnica declarando al norte del Cauca territorio de reserva ambiental interétnica e intercultural para la sostenibilidad de la soberanía y autonomía agroalimentaria.

En el 2018 se plantean la construcción del Plan de Vida Interétnico e Intercultural del Norte del Cauca, documento que es el conjunto de estrategias, acciones y propuestas que responden al sentir de las comunidades y a la intención de consolidar un proyecto político orgánico y las condiciones materiales y culturales para su pervivencia en el territorio.

Una reforma agraria estructural sería la solución al problema de la inequidad en la concentración de la propiedad de la tierra y de gran parte del a violencia que estremece al Cauca.

Por: Fabio Marriaga, poeta y activista del Cauca, integrante de la ARUC





Guerra con rostro infantil

El reclutamiento de niños-as, adolescentes y jóvenes en el sur del Cauca es una realidad que duele. Como líderesa social y miembro de ASINTRACAMPIC, he visto cómo el conflicto armado ha cambiado nuestras comunidades y arrebatando sueños a las nuevas generaciones.

Durante mucho tiempo los grupos armados -guerrillas- presentes en nuestros campos llegaron con discursos políticos, ideológicos. Hablaban de transformación social, justicia para los más pobres, reivindicación de derechos y lucha contra las desigualdades. Muchos jóvenes los escucharon y se unieron a las insurgencias con el propósito de aportar a una causa mayor, persuadidos de la legitimidad del alzamiento y construyendo una identidad política torno a la guerra.

Hoy la situación es diferente. El conflicto cambió y también los métodos de reclutamiento. Los grupos armados ya no necesitan convencer a los jóvenes con discursos

elaborados. Basta con ofrecerles dinero, método muy efectivo en áreas donde las oportunidades son escasas, el trabajo digno no existe, pocos terminan la secundaria y no hay acceso a la educación superior.

Los jóvenes reciben ofrecimientos de hasta dos millones de pesos al mes (€450) para unirse a estructuras armadas.

Para muchas familias es un ingreso que no obtienen con actividades de rebusque. Los grupos armados lo saben y lo utilizan para fortalecer sus filas. Y quienes rechazan la oferta a menudo son blanco de amenazas y persecuciones y obligados a desplazarse de su región. ASINTRACAMPIC apoya a niñas-os, adolescentes y jóvenes que han recibido el ultimátum para unirse.

Cada vez que una joven deja la comunidad, perdemos un pedazo de nuestro tejido social y de la capacidad de defender los derechos de las mujeres y la vida comunitaria. No es solo una persona la que se va. Es una hija,





una hermana, una estudiante, una líderesa, una portadora de conocimiento y sueños que deja atrás lo que da sentido a su vida.

La violencia de género y el desplazamiento forzado por amenazas de reclutamiento causan heridas emocionales. En el conflicto armado cuerpos y vidas son lugares de control y de dominación.

La respuesta debe ser integral. Necesitamos inversión social, educación de calidad, programas de empleo juvenil, fortalecimiento de procesos comunitarios y garantías para que nuestros jóvenes puedan construir proyectos de vida dignos sin abandonar sus territorios.

También queremos que las instituciones respondan a las denuncias de manera oportuna y proporcionen mecanismos de protección reales para quienes están en riesgo.

En ASINTRACAMPIC continuaremos

apoyando a las familias afectadas por el reclutamiento de menores y construyendo espacios de participación juvenil que ofrezcan alternativas a la violencia. Estamos comprometidas con la vida, la paz y el derecho de nuestros niños y jóvenes a crecer libres de miedo.

Sueño con el día en que ningún joven tenga que elegir entre la pobreza y la guerra, con lugares donde las oportunidades sean más que las armas y donde las nuevas generaciones crezcan en medio de la esperanza y no rodeadas de miedo.

Hay que defender la vida y el territorio, nuestra historia, cultura e identidad y ampliar la lucha comunitaria contra los efectos perversos de la actividad extractiva de las mineras, las petroleras y las economías ilegales, que son impulsadas con métodos violentos para imponer el saqueo y continuar con la tala de selvas para sembrar coca, afectando el ecosistema amazónico.

Sabemos que la crisis ambiental y la crisis humanitaria están íntimamente ligadas. Cuando se destruye un bosque también se afecta la seguridad alimentaria de las familias. Cuando un río está contaminado, también se viola el derecho al agua. Si tenemos más economías ilegales, también hay más riesgos para quienes defienden los territorios.

La protección ambiental debe ser central en la política pública. Se deben tomar acciones reales para prevenir la deforestación y la contaminación, para combatir las economías ilegales que generan violencia y para generar economías sostenibles en los territorios. Las mujeres aportan sus procesos organizativos, espacios de formación y la actividad comunitaria.

Nuestro esfuerzo por la conservación ambiental es un camino hacia la paz.





La Serranía de San Lucas en peligro

La Serranía de San Lucas es un territorio olvidado por el Estado, pero no por los que se aprovechan de sus riquezas. Ubicada entre los departamentos de Bolívar, Antioquia, Santander, Sucre y Cesar, esta región representa un corredor estratégico de importancia ambiental, cultural y económica. Sus montañas, bosques, quebradas y ríos albergan una biodiversidad excepcional con la que conviven las comunidades campesinas y mineras que encontraron en la tierra una forma digna de subsistencia.

La región ha sido colonizada por el campesinado que desde hace décadas combina labores agrícolas y minería artesanal de oro. La llegada de mineras ilegales con maquinaria pesada y con ejército propio está rompiendo los bosques, las fuentes de agua y poniendo en peligro de desplazamiento masivo a los habitantes de la Serranía.

Para muchas familias la extracción artesanal de oro es una alternativa económica en tiempos difíciles, cuando hay malas cosechas o los precios de los productos agrícolas caen, la minería con herramientas básicas les permite complementar los ingresos familiares que dinamizan las economías locales, sin alte-

rar de manera significativa el entorno natural.

Sin embargo, el territorio que conocieron generaciones enteras de campesinos y mineros ancestrales ha comenzado a desaparecer.

La Serranía de San Lucas es uno de los ecosistemas más importantes del país. En ella habitan unas 587 especies de aves, cerca de 80 especies de mariposas y varias especies endémicas de lagartos de colores. Su extensa cobertura boscosa, en gran parte virgen, constituye un refugio para muchas especies de flora y fauna.

Además de su riqueza biológica, el territorio posee abundantes fuentes de agua dulce que abastecen comunidades, cultivos y sistemas productivos de toda la región. Paradójicamente, estas mismas riquezas naturales han convertido a la Serranía en un escenario permanente de disputa.

El oro atrae a los malandros con sus máquinas gigantes y su violencia. Expulsan a los mineros que hacen minería artesanal y de subsistencia en vetas y en aluviones.

En el 2023 había 9.400 hectáreas afectadas por explotación aluvial. La llegada de más de 300 retroexcavadoras y del grupo paramilitar Clan del Golfo, afecta a la naturaleza, a las co-

comunidades agro mineras y a su pervivencia en la Serranía.

A partir de 2021, la situación se agravó con el retorno de los paramilitares enfrentados con otros grupos armados que históricamente han tenido presencia en la zona. Pelean por el control del territorio para la minería de oro y el narcotráfico.

La población civil quedó atrapada en medio de la confrontación por el control de corredores estratégicos y de las riquezas del subsuelo.

Consecuencias devastadoras

Miles de personas han sufrido desplazamiento forzado. Otras han sido desaparecidas o asesinadas. Comunidades enteras viven bajo amenazas permanentes y bajo la imposición de decisiones tomadas por actores armados que han reemplazado la autoridad legítima del Estado.

Al tiempo, los impactos ambientales alcanzan niveles alarmantes.

La minería a cielo abierto ha transformado radicalmente el paisaje. Bosques completos han sido arrasados para abrir paso a gigantescos frentes de explotación. Las quebradas que durante décadas abastecieron de agua a comunidades, animales y cultivos, hoy presentan altos niveles de contaminación por mercurio, sedimentos, lodos y residuos provenientes de la actividad minera.

La utilización indiscriminada de mercurio constituye una de las mayores amenazas para la región. Este metal pesado no solo contamina las fuentes hídricas, sino que afecta directamente a la fauna acuática y a las comunidades que dependen de esos recursos para sobrevivir. Diversas especies de peces han desaparecido de zonas donde anteriormente eran abundantes, mientras otras enfrentan serios riesgos para su supervivencia.

El deterioro ambiental no representa únicamente una tragedia ecológica. También constituye una amenaza para la seguridad alimentaria y económica de cientos de familias campesinas que dependen de los recursos naturales para sostener sus medios de vida.

Lo más preocupante es que gran parte de esta minería ya no es ejercida por los mineros ancestrales, ni por las

familias que históricamente habitaron la región.

Muchos de los actuales procesos extractivos son impulsados por personas y estructuras externas cuyo principal interés es la obtención rápida de ganancias, sin consideración alguna por las consecuencias sociales y ambientales de sus actividades.

Frente a esta realidad, numerosos líderes sociales y comunitarios han intentado alzar su voz. Sin embargo, defender el territorio en la Serranía de San Lucas se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Mi propia historia es una muestra de ello.

En una reunión comunitaria convocada para socializar el ingreso de nueva maquinaria destinada a la extracción de oro en la región, varios líderes sociales expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que tendría este modelo de explotación.

Explicamos que la contaminación de quebradas y fuentes hídricas afectaría el acceso al agua de numerosas comunidades. Advertimos sobre la deforestación masiva, la pérdida de biodiversidad y los riesgos asociados a la alteración de los cauces naturales.

También señalamos una preocupación que muchas veces pasa desapercibida: el peligro para las comunidades ubicadas cerca de las quebradas intervenidas. Durante las temporadas de lluvia, el movimiento masivo de tierra, piedras, lodos y escombros puede generar represamientos artificiales que poste-



riormente se convierten en avalanchas capaces de destruir caseríos enteros.

Asimismo, advertimos sobre los efectos climáticos y las transformaciones irreversibles que estas actividades podrían generar en el equilibrio ecológico de la región.

Nuestra intervención no fue bien recibida. La Serranía de San Lucas en peligro

Quien dirigía aquella reunión, identificada por los asistentes como integrante de una estructura paramilitar, respondió que la explotación minera se realizaría de esa manera independientemente de la opinión de las comunidades.

La decisión ya estaba tomada. Semanas después comenzaron a ingresar las primeras máquinas. Los temores que habíamos expresado empezaron a materializarse frente a nuestros ojos.

Poco tiempo después, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados por el control de la minería, tres retroexcavadoras fueron incendiadas por una organización insurgente. Como represalia, comenzaron a circular amenazas contra líderes sociales de la región.

Entre los amenazados me encontraba yo.

Fuimos señalados injustamente y vinculados a actores armados sin prueba alguna. Las amenazas indicaban que varios líderes comunitarios seríamos asesinados.

Ante el riesgo inminente decidí abandonar mi finca y desplazarme hacia la ciudad de Bucaramanga. Horas después de mi salida, hombres armados llegaron a buscarme. No me encontraron. Pero ese mismo día se llevaron a otros dos líderes sociales de la región.

Al día siguiente fueron hallados asesinados.

Desde entonces comprendí que en muchas regiones de Colombia defender el agua, los bosques y la vida puede costar la propia existencia.

La historia de la Serranía de San Lucas no es únicamente una historia sobre minería. Es la historia de comunidades que han intentado proteger su territorio frente a intereses económicos y armados que consideran los recursos naturales como mercancías y no como

patrimonio colectivo.

También es la historia de líderes sociales que continúan arriesgando sus vidas para denunciar la destrucción ambiental, exigir respeto por los derechos humanos y defender la permanencia de las comunidades en sus territorios.

Mientras el país discute modelos de desarrollo y estrategias de crecimiento económico, regiones como la Serranía de San Lucas siguen enfrentando una pregunta fundamental: ¿quién paga realmente el costo de la extracción de los recursos naturales?

La respuesta parece estar escrita en las quebradas contaminadas, en los bosques destruidos, en las familias desplazadas y en los nombres de quienes fueron silenciados por atreverse a defender la tierra que los vio nacer.

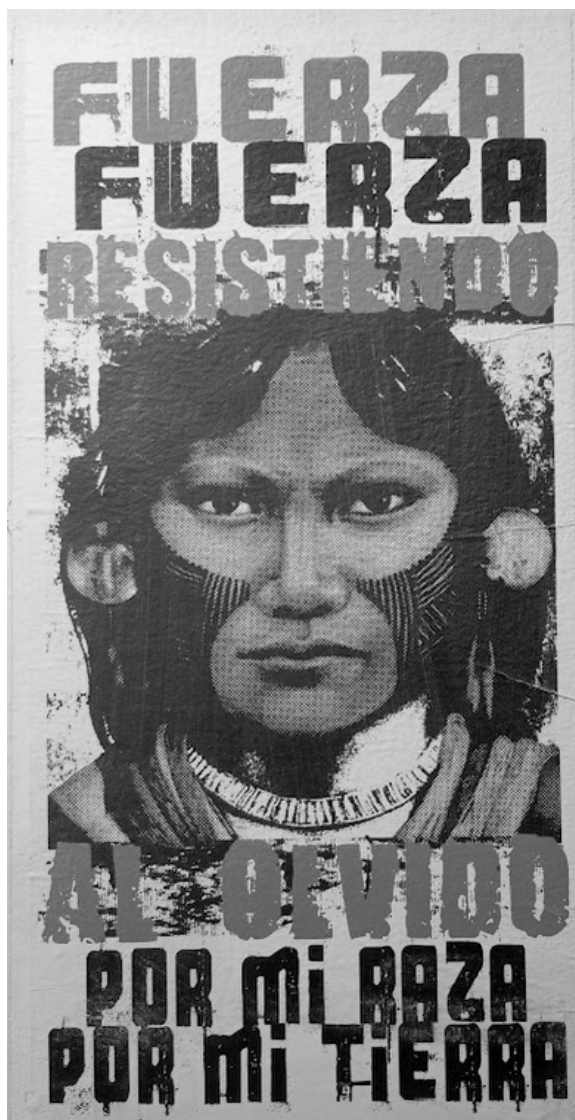
La protección de estos territorios no puede seguir dependiendo exclusivamente del valor de las comunidades que los habitan. Es una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de todos aquellos que entienden que la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos son causas inseparables.

Porque cuando asesinan a un líder social que protege el territorio, no solo se apaga una voz. También se pierde una parte de la memoria, de la identidad y de la esperanza de toda una comunidad.

Por: ALFREDO, integrante del Comité de Solidaridad con presos Políticos CSPP Santander, líder campesino y comunal.



Salud Precaria en el centro del Valle de Cauca



La ausencia de Estado enferma

El centro del Valle del Cauca es conocido por la fertilidad de sus tierras, la fuerza de su economía agrícola y la capacidad de trabajo de las comunidades campesinas. Sin embargo, detrás de esa imagen de prosperidad existe otra realidad: miles de habitantes rurales enfrentan enormes dificultades para acceder a servicios de salud oportunos, seguros y de calidad. A la histórica brecha entre el campo y la ciudad se suma un factor devastador: la persistencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial, se imponen con

violencia y limitan las posibilidades de desarrollo de las comunidades.

La crisis de la salud pública fue reconocida por la gobernación del Valle del Cauca hace pocos días al declarar la emergencia humanitaria por el deterioro de la red hospitalaria, el cierre de servicios, la disminución de personal y la sobreocupación de instituciones de atención que, en algunos casos, superan el 200 % de su capacidad.

Mientras las cifras reflejan el colapso institucional, en las zonas rurales la situación adquiere otras dimensiones. No solo faltan médicos, especialistas o medicamentos. También faltan garantías para desplazarse, para ejercer el liderazgo comunitario y para vivir sin miedo.

El campo olvidado

Desde corregimientos como San Rafael, La Mina, La Marina, Barragán, Monteloro, Tres Esquinas y otras veredas dispersas, los habitantes deben recorrer largas distancias para acceder a consulta médica, exámenes diagnósticos o tratamientos especializados en Tulúa.

Las dificultades de transporte, el deterioro de las vías terciarias y los costos para llegar hasta la zona urbana convierten el acudir al médico en una odisea.

El campesinado que abastece de alimentos la región se encuentra con los mayores obstáculos para acceder al derecho fundamental de la salud.

Aunque Colombia ha avanzado normativamente con la adopción de políticas de salud rural para cerrar brechas históricas, la realidad muestra que las comunidades campesinas continúan enfrentando enormes barreras geográficas, económicas y sociales para recibir atención integral.

La violencia, una barrera para acceder a la salud

La problemática no puede entenderse únicamente desde la infraestructura hospitalaria o la falta de recursos financieros.



En amplios sectores rurales del centro del Valle del Cauca persisten dinámicas asociadas al conflicto armado, economías ilegales y presencia de grupos armados que se disputan el control territorial. Las alertas institucionales, los riesgos que enfrentan las comunidades rurales de municipios como Tuluá, Bugalagrande, Andalucía, Sevilla y Caicedonia, debido a la presencia y accionar de grupos armados ilegales.

En estos contextos el acceso a la salud es una necesidad condicionada por el miedo.

Muchos líderes comunales evitan denunciar situaciones irregulares por temor a represalias. Otros prefieren abandonar el territorio antes que exponerse a amenazas y someterse a extorsiones. Familias enteras reducen su movilidad y la actividad económica por el riesgo al transitar por los corredores rurales.

Las consecuencias son múltiples: disminuye la actividad productiva, aumenta la pobreza, se debilita el tejido social y se agravan problemas de salud física y mental que pocas veces son registrados en las estadísticas oficiales.

El costo del liderazgo social

Esta realidad afecta a quienes hemos trabajado acompañando comunidades rurales.

Los riesgos que enfrentan los líderes sociales en el territorio no son una discusión académica ni una cifra más en los informes institucionales. Son experiencias que transforman vidas y obligan a tomar decisiones dolorosas.

La persistencia de grupos armados ilegales en Tuluá y el centro del Valle del Cauca continúa afecta la vida de las comunidades campesinas. Las presiones ejercidas sobre lí-

deres sociales, representantes comunitarios y habitantes de las veredas, generan un clima de temor e incertidumbre, que limita la participación ciudadana y debilita los procesos organizativos.

Cuando las comunidades pierden a sus líderes, gestores sociales o representantes comunales, pierden interlocutores para tramitar necesidades colectivas, gestionar brigadas médicas, promover campañas de prevención y de acceso a la salud y a otros servicios institucionales. La violencia afecta la seguridad de las personas, su acceso a salud y la disponibilidad del acompañamiento en procesos relacionados con salud, educación y desarrollo rural.

El miedo termina convirtiéndose en una enfermedad colectiva.

Hospitales desbordados, comunidades abandonadas

La crisis estructural del sistema de salud golpea a instituciones que históricamente han servido de referencia para el centro del Valle del Cauca.

Las alertas sobre sobreocupación hospitalaria, reducción de servicios y dificultades financieras generan preocupación porque afectan directamente a la población más vulnerable, que depende exclusivamente de la red pública para acceder a atención médica.

Cuando una persona del sector rural logra superar las barreras económicas, geográficas y de seguridad para llegar a una consulta especializada, con frecuencia se encuentra con listas de espera, remisiones demoradas o servicios saturados.

La salud se convierte entonces en una cadena de obstáculos donde cada eslabón re-



presenta una nueva dificultad.

Más allá de los indicadores

Las discusiones sobre cobertura, presupuestos y aseguramiento suelen centrarse en indicadores técnicos. Sin embargo, detrás de cada cifra existen historias humanas.

La madre campesina que posterga una consulta porque no tiene dinero para el transporte. El adulto mayor que espera meses una cita especializada. El trabajador rural que continúa labores enfermo para no perder un día de trabajo y el sustento familiar. La dirigencia social local que enfrenta la crisis del sistema de salud y soporta amenazas por defender los derechos de las comunidades.

La salud no puede analizarse de forma aislada. Está relacionada con la seguridad, la educación, la infraestructura, el empleo y la presencia efectiva del Estado.

Un llamado

La situación del centro del Valle del Cauca exige respuestas integrales y sostenidas.

No basta con aumentar recursos para hospitales si las comunidades rurales continúan viviendo bajo condiciones de inseguridad. Tampoco es suficiente fortalecer la presencia institucional si los habitantes del campo siguen encontrando enormes barreras para acceder a servicios básicos.

Garantizar el derecho a la salud implica garantizar también el derecho a vivir sin miedo, a movilizarse libremente, a ejercer liderazgo comunitario y a desarrollar proyectos productivos sostenibles.

El campesinado del centro del Valle no necesita discursos de solidaridad. Necesita carreteras transitables, centros de salud funcionales, personal

médico suficiente, protección efectiva para sus líderes y una presencia estatal que asuma la autoridad que durante años han impuesto los grupos armados ilegales.

La salud es más que curar enfermedades. Es poder vivir con dignidad en los territorios, con seguridad y esperanza.

Por: Juan Camilo Castro Noreña

Asociación de Juntas Comunales del municipio de Tuluá. Ingeniero Industrial – Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Líder social - Defensor de Derechos Humanos.





Entrevista: Unia Aranzadi

Esperanza ante lo más reaccionario del uribismo que se vuelve a asomar

Unai Aranzadi Ormaetxea (Getxo, Bizkaia, 1975) es fotógrafo, cineasta y periodista especializado en conflictos armados, memoria y derechos humanos. Trabaja en sitios de donde la gente quiere huir para mostrar los horrores de la guerra y precipitar cambios en la humanidad. Desde adolescente quiso ser reportero de guerra y lo consiguió para Al Jazeera, BBC, CNN, RTVE, Canal+, Eitb y páginas alternativas como Rebelión. Ha cubierto conflictos armados en el Líbano, Palestina, Iraq, Afganistán, Somalia, Libia, Chechenia, Uganda, Sudán, Nepal, Congo, Ucrania, y conflictos sociales en India, México, Nicaragua y Bolivia. En el invierno pasado recorrió a pie el corredor de guerra entre las ciudades ucranianas de Járkov con Kozacha Lopan en la frontera con Rusia. En México estuvo con el EZLN y a Colombia ha viajado veintidós veces para hacer reportajes y documentales con las guerrillas de las FARC y con el ELN.

Entrevistamos a Unai en Avilés al presentar su obra "Buscando a Pedro Baigorri",

mejor película del XXII Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona.

Unai estuvo por años recogiendo información de los pasos del joven cocinero de origen navarro PEDRO BAIGORRI quien viajó de París a La Habana de los barbudos donde hizo un curso militar y fundó una guerrilla que inició operaciones en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Martha en Colombia, donde murió el 6 de octubre de 1972. Su cuerpo continúa desaparecido.

Unai, Cómo va la búsqueda de Pedro?

El caso de Baigorri no es de desaparición. Lo mató el ejército colombiano en una embocada sin aviso de rendición. Su muerte salió en la prensa. Lo supo su familia en la aldea natal de Zabaldika. Varios campesinos vieron como llevaron su cuerpo hasta el cementerio de Curumaní y lo enterraron extramuros del camposanto, como era costumbre para quienes no fueran cristianos, aunque él era simpatizante

de la teología de la liberación. Hubo testigos y el gobierno colombiano comunicó a Franco la muerte de Pedro. Le cortaron las manos para identificar el cuerpo. En 1972 no había los medios ni las comunicaciones de hoy entre Navarra y Colombia. No hubo medios para recuperar sus restos, pero décadas después lo intentamos encontrar.

Hay conflictos similares al de Colombia?

Hay Estados cometiendo crímenes de guerra similares, como Nigeria, Sudán y Myanmar, antigua Birmania, donde igual que en Colombia la fuerza pública se guía por la doctrina del enemigo interno impulsada por los Estados Unidos desde la década de los 60s. para evitar la expansión del comunismo. En Colombia es para romper las protestas sociales o armadas que plantan cara al extractivismo, a la agroindustria y a la llegada de las multinacionales para explotar los territorios. El de Colombia es un problema de soberanía nacional, es una guerra por la tierra donde el Estado no hace nada por mantener en el territorio a los habitantes locales.

Qué cambios percibes en el conflicto co-

lombiano desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC?

Creo que ni el Estado ni la sociedad colombiana han sabido responder a las FARC que dieron un paso valiente y generoso dejando las armas y haciéndose a un lado, dejando un acumulado histórico de lucha que forma parte de la historia de un país que incumplió parte central de los acuerdos del 2016. Aunque la izquierda colombiana perdió las elecciones ante la ultraderecha, hay un magma, una conciencia de país y de los cambios posibles. No se puede perder la esperanza ahora que lo más reaccionario y oculto del pasado uribista se vuelve a asomar. Medio país muestra madurez y votó una Colombia diferente.

Cómo ves el papel de la prensa en el caso de Colombia?

Los medios masivos en el caso de Colombia juegan a favor del mercado que impone una la narrativa de los guerrilleros. Han corregido un poco y son capaces de incluir matices que hace 20 años, en la época de Uribe no eran capaces de narrar. La voz dominante es la del capital, la del mercado,

la de la fuerza bruta del Estado. Hay ventanas que dan espacio a piezas periodísticas que incluyen críticas al Estado y a la grades empresas, lo que era impensable en los 90s.

Los medios de comunicación con el nuevo presidente colombiano tendrán que poner la lupa en las regiones alejadas y de manera especial en zonas de frontera como la de Venezuela, por abusos en los previsible operativos conjuntos USA - Colombia.

PROYECCIÓN DOCUMENTAL
Y DIALOGO CON SU DIRECTOR
 UNAI URAZANDI

MARTES 23 JUN
19:00H
 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
 AVILÉS

BUSCANDO A PEDRO
BAIGORRI

Mejor película
 XXII Festival de Cine y
 Derechos Humanos
 Barcelona

Invita: Soldapaz Pachakuti pachakuti.org
 Colabora: Ayuntamiento de Avilés Universidad de Oviedo



El racismo normalizado

En Colombia persiste el racismo estructural, sistemático y normalizado. Su gobierno acoge esta conclusión del Informe del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley, presentado el 14 de mayo/26.

Constataron que, a pesar de la profusa legislación por la igualdad y de las acciones del gobierno, persisten la violencia y la exclusión de claro sesgo racista contra la población joven afrodescendiente en los barrios marginales, manifestadas en hechos cotidianos que forma parte de un sistema arraigado, que reproduce las desigualdades, incluso de manera inconsciente.

La policía está señalada de abusos graves que incluyen el perfilamiento racial de los jóvenes negros en los barrios marginales de ciudades de la costa Caribe, seguida de registros abusivos y en algunos casos la muerte, o la detención arbitraria y la reclusión en condiciones inhumanas en depósitos de jóvenes como el Centro de Detención Provisional de Bellavista en Cartagena de Indias, donde centenares de jóvenes sobreviven amontonados de pie en celdas sucias, sin luz solar, sin ventilación y sin agua, con temperaturas que superan los 32°C a

la sombra todo el año, sin atención médica durante meses, en instalaciones destinadas a la detención de corta duración.

En ciudades y regiones de la costa del Pacífico la juventud negra es objetivo de grupos armados ilegales y bandas criminales que los reclutan por la fuerza y aprovechándose de la pobreza y de la falta de oportunidades. Los ataques incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia sexual y restricciones de movimiento, con poca o ninguna respuesta institucional.

Lizeth, la policía ataca por racismo doctrinal en Cartagena de Indias

En los barrios populares de la turística ciudad de Cartagena de Indias la juventud negra sufre la violencia policial racista. Es una realidad que las autoridades no pueden negar porque sobresalta a las gentes, se refleja en la prensa y en las estadísticas, se grita como denuncia en las calles exigiendo el cambio de la doctrina policial y el cese de la impunidad.

Cartagena, junto con Bogotá, Quibdó y Cali, fue una de las ciudades visitadas por el Mecanismo para promover la igualdad ante la ley. Es la ciudad de origen de Lizeth, ma-

dre de dos jóvenes asesinados, uno de ellos por miembros de la policía nacional. Se organizó con otras víctimas y comenzó su lucha contra la brutalidad, el racismo policial y la impunidad. Eso la puso en riesgo, sin embargo, afirma:

“La policía de Cartagena ejerce violencia contra los jóvenes negros en los barrios populares. Es un racismo aprendido como doctrina en las escuelas de formación por agentes y oficiales. Cuando el patrullero sale a las calles de nuestros barrios viene con orden de perseguir a los pelaos que están parchando en los parques, fumando marihuana o haciendo deporte. Resultan sospechosos por el color de la piel y por el barrio. Desconfían, piensan que son delincuentes, drogadictos o vendedores de drogas. La policía perfila a los chicos y los ataca en barrios como Olaya, San Francisco, La Candelaria, Nelson Mandela, Pozón, La Esperanza, La María, Torices, San Pedro, Libertad, Henequén y en otros barrios”.

Las agresiones vienen en aumento desde la pandemia del COVID. “Los jóvenes de los barrios de más pobres sufren agresiones brutales de la policía que no se comporta así con en los barrios de los ricos, como Bocagrande, Crespo o Castillogrande.”

Ante la violencia institucional las víctimas crearon en el 2013 CONTEXTOS, un colectivo popular de resistencia anti racista y anti punitiva ante los abusos de la policía. “Trabajamos desde el arte, con murales. Muchas somos madres cabeza de hogar y trabajadoras informales. Como movimiento pensamos que son los gobernantes de turno los que exigen resultados a los patrulleros que capturan jóvenes y los cargan con armas o con drogas cuando no tienen

éxitos para mostrarle a los jefes. Muchos jóvenes acaban presos sin saber por qué. Mi hijo HAROLD DAVID fue asesinado el 24 de agosto del 2020. Tenía 17 años y era una promesa del fútbol. Varios policías lo agredieron y lo asesinaron. Luego de cinco años de lucha judicial y de denuncias públicas, tres agentes fueron condenados en diciembre pasado. El que disparó fue condenado a 430 meses de prisión y dos más a 118 meses de cárcel, pero estos fueron absueltos a pesar de que falsearon la verdad y colaboraron con la muerte de Harold.”

Hace un año a Lizeth le asesinaron otro hijo. “Otro de mis hijos, JESUS DAVID MORALES PAYARES fue asesinado el 7 de julio del 2025 por una banda criminal vinculada al sicariato, el narcotráfico, la extorsión, y el reclutamiento forzado. Él fue reclutado y como no accedió a las peticiones lo mataron en el mismo barrio donde vivíamos. Desde que exijo justicia por HAROLD recibo hostigamientos de la policía, abusos, señalamientos, amenazas por terceros porque la policía me señalaba de ser “sapa”. Eso me puso en riesgo y me he cambiado de barrio varias veces. Pensamos que es urgente que la policía reciba una formación distinta. No queremos más militarización porque eso agrava la violencia”.

Lizeth y su organización vienen proponiendo desde hace años lo que recomienda el Informe, una reforma estructural de la Policía Nacional, transferirla del ministerio de defensa a un ministerio civil, afinar los mecanismos de sanción por discriminación racial y abuso policial y abordar con urgencia la crisis humanitaria en los centros de detención transitoria repletos de jóvenes negros obligados a no tener futuro.



Un muñeco de utilería recon- loniza a América Latina

Por Reinaldo Spitaletta

Como la historia poco ha cambiado, en particular para nuestros pueblos arrasados, volvemos con lo mismo: Trump y su reconlonización de América Latina. Tal vez los bárbaros cayeron del cielo o vinieron por subterráneos o, para asustar con mayor intensidad, nos los inocularon en películas de terror. Pero, qué va. Llegaron del Norte y se quedaron, tras inundarnos de hamburguesas y despojarnos de lo que, en tiempos románticos, llamaron “las raíces”.

América Latina desde épocas remotas ha sido arrasada por los nuevos bárbaros (podríamos recordar Ante los bárbaros, de Vargas Vila), que aún no envejecen. Parecen haber descubierto, como no pudo hacerlo Juan Ponce de León, el manantial de la eterna juventud. Y por estas comarcas continúan con el saqueo, que ha tenido diversas formas de ejercerse: secuestrar algún presidente; poner a sus pies a otros; deponer mandatarios o asesinarlos, o diseñar, con el Comando Sur, bases militares.

Trump, que en realidad es solo un muñeco de utilería de los dueños de Estados

Unidos y de buena parte del mundo, parece gozar con su Estrategia de Seguridad Nacional, la misma que, con pequeñas variaciones, reedita la Doctrina Monroe, con los aditamentos del cazador Teddy Roosevelt y el Corolario del hombre que acaba de ser derrotado, quién lo creyera, por Irán y sus ayatolas.

Trump y sus conmlitones andan cabalgando por sus viejos solares. Y de nuevo vienen por todo. O de otro modo, jamás se han ido. Han cultivado a sus títeres y los han perfeccionado en servilismo. Y ahora, en medio del peonaje establecido por Trump y su recua en buena parte de estos territorios, se dan gusto en distintas geografías, adobadas para el despojo, como Argentina, Honduras, Ecuador, Venezuela (secuestraron a Maduro y se quedaron con el petróleo), Bolivia... Tienen resistencias en Brasil, Uruguay, Nicaragua y México. A Colombia, que ha sido un histórico lacayo de Washington, la han alistado para devorarla en páramos, llanos, mares y montañas.

La neocolonización trumpista, que se

vale de distintos recursos, que van desde lo lingüístico hasta la instalación de bases militares, parece ser la imposición de otra especie de Plan Cóndor, o de su segunda parte. Hay, para decirlo en términos marinos —o de piratería—, un nuevo desembarco imperial, un asedio permanente sobre las que ayer fueron repúblicas bananeras y parcelas de la gringada. En Colombia, por ejemplo, los filibusteros están a la vista.

A la orden del día están las entregas de soberanías, las aperturas económicas, la aplicación de los mandamientos neoliberales y las adecuaciones para la inversión extranjera leonina. También la corrupción de las palabras. Lo libertario, que en otros tiempos servía para designar la resistencia y el rechazo a los poderes omnímodos, es ahora el disfraz de la derecha recalcitrante, como ha pasado, por ejemplo, en Argentina. Estamos en un tiempo de abierta y descarada injerencia de Washington en los asuntos internos de casi todos los países de América Latina, por no decir de la totalidad.

El depredador Trump y su troupe, además de otras nóminas de esbirros adocenados, han diseñado una incursión para tragarse a América Latina, en la que, además, ponen gerentes y corsarios. Sigue moviendo sus fichas en el mapa, como la que acaba de poner en Colombia, que es, sin disfraces, no solo un áulico, sino un auténtico cipayo. Estamos en calendas en las que la derecha (cabe anteponerle el “ultra”), acondicionada por el imperialismo, se dispone a entregarle el botín de los minerales críticos, los hidrocarburos y otras riquezas.

El ajedrez dispuesto por la Casa Blanca en América Latina tiene piezas clave para

continuar con la rapiña, que es parte de una extensa historia de dominación de la metrópoli en sus colonias y neocolonias. Todo parece responder a un viejo libreto, en el que se renuevan los peones, como el recién elegido presidente de Colombia. Por estos lares destriparán gente, tierras, páramos; feriarán empresas estatales y mantendrán, quizá como en los viejos tiempos de anti-democráticos estatutos de seguridad y otras “inseguridades”, el perverso recurso de la represión, la censura y el recorte a las libertades públicas. Ya se verá. Ya se presiente.

Los bárbaros no se han ido. Han cambiado de ropajes y tienen nuevas mañas para la simulación y el camuflaje. No hay que confundirse: el enemigo principal de nuestros pueblos sigue siendo el mismo. Solo que va mutando y apela a nuevas armas, como, por ejemplo, la de mantener en la oscuridad y en una perpetua alienación a casi toda la sociedad. Hace ver como una maniobra ejemplar las invasiones, los bombardeos, los asesinatos de inmigrantes y mirar al verdugo, por decir algo, al señor Trump, acusado de pederastia, como un “salvador”.

Por lo demás, los bárbaros, como el caso del imperialismo yanqui, acostumbran vestirse de “civilización”. Saben confundir, mimetizarse y lograr que la víctima termine amando a quien le cortará la cabeza.



Letras por la vida

ABYA-YALA

(tierra en plena madurez)

Luego llamada América.
“La paz es el camino...” Gandhi.

Abya-yala no está en venta.
Ni se compra, ni se cambia.
Ni se regala, ni se alquila.

Abya-yala, es nuestra tierra.
Nuestra madre, nuestra cuna.

Abya- yala nos regala
El sol de la mañana.
El aire de la tarde.
El agua de la noche
Las estrellas y la luna.

Abya-yala llora sus muertos
En las canoas y en las calles.
En la pampa y en la Selva
En el caribe y en Caracas.

Abya-yala llora si le tumban
Su bosque, si le matan sus hijos.
Si le roban su petróleo, que
Es su sangre, que es su vida.

Abya-yala sangra si el tirano
Bombardea a humildes pescadores
Si masacra a sus migrantes.

Abya-yala, no está en venta
Ni se compra, ni se cambia
Ni se regala, ni se alquila.

Abya-yala es una sola tierra
Desde la fría Alaska
Hasta la extensa Patagonia.

Nuestros mayores aquí nacieron
Nuestros padres aquí lucharon
Ellos la cuidaron, ellos la sanaron.

No insistan señores de la guerra
Abya-yala es nuestra madre tierra.

LA PROMESA

“Cada vez se perfecciona más el
Exterminio” J. E .Pacheco.

Prometió acabar con la pobreza
Y la miseria en su primer año de gobierno
Y a fe que está cumpliendo con presteza
Miles de fosas comunes de N.N. lo confirman.
Tres mil muertos cada año de gestión
Trecientos líderes indígenas desaparecidos
Cientos de sindicalistas bajo el asfalto.

Prometió acabar con la pobreza
Y la miseria en su primer año de gobierno
Cientos de masacres lo confirman
Cien cabezas cortaron en el Naya
En Mapiripán otras doscientas
Y ya no se ven los horribles indigentes
En los andenes afeando la ciudad.

Dicen las últimas estadísticas que más
De seis millones se volvieron caminantes
Y un millón desapareció como por arte de magia
Que no digan ahora que no está cumpliendo.



Con el apoyo de  PROTECT DEFENDERS.EU

